

Bogotá D.C.

SEÑORES

JUZGADO 27 ADMINISTRATIVO DE BOGOTÁ

Juez: Humberto López Narváez

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Ciudad

EXPEDIENTE: RADICACIÓN No. 11001333502720210024500

MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

DEMANDANTE: MARIA DEL CARMEN VILLAMARIN IDROBO

DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE DEMANDA

CATALINA EUGENIA CANCINO PINZON, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No.52.053.853 y Tarjeta Profesional N° 109.545 del C. S de la J, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá, abogada en ejercicio, obrando en representación de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, de acuerdo al poder a mi conferido, por medio del presente escrito y estando dentro del término legal, dado que el auto admisorio de la demanda fue notificado el día 22 de octubre de 2021, concurre ante este Honorable Despacho para presentar CONTESTACION DE LA DEMANDA dentro del medio de control de NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO incoado por la señora MARIA DEL CARMEN VILLAMARIN IDROBO, mediante apoderado judicial en contra de la **SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO**, contestación que me permito presentar en los siguientes términos.

De antemano se permite la suscrita Abogada solicitar a su señoría, NEGAR todas las pretensiones de la demanda y con ello acceder a decretar las excepciones que más adelante se expondrán.

FRENTE A LOS HECHOS

1. **CIERTO.** De conformidad con la constancia de vinculación laboral expedida por la Dirección de Talento Humano de la entidad que represento.
2. **CIERTO.**
3. **CIERTO.**
4. **CIERTO.**
5. **CIERTO**

6. **CIERTO.**
7. **CIERTO.**
8. **CIERTO.**
9. **CIERTO.**
10. **NO ES CIERTO.** Lo que alegó la parte demandante por considerarlo nulo fue el cierre de la etapa probatoria, puesto que no se logró obtener el testimonio de Omar Garcés dado que la defensa no indicó la dirección para la citación, no porque la investigada y su apoderado no asistieran a la audiencia del 5 de diciembre de 2019.
11. **CIERTO.**
12. **CIERTO.**
13. **CIERTO.**
14. **CIERTO.**
15. **CIERTO.**
16. **CIERTO.**
17. **CIRTO.**
18. **CIERTO.**
19. **CIERTO.**
20. **CIERTO.**
21. **CIERTO.**

FRENTE A LAS DECLARACIONES Y PRETENSIONES DE LA DEMANDA (PETICIONES)

En lo relacionado con las pretensiones sustentadas y solicitadas en contra de la entidad que hoy represento, solicito a su señoría se sirva NEGAR cada una de las mismas por los motivos que expondré a continuación.

RAZONES JURIDICAS DE LA DEFENSA

Es evidente que las pretensiones solicitadas por la demandante no tienen el sustento jurídico suficiente para ser llamadas a prosperar. Por cuanto existen fundamentos legales y procedimentales los cuales se pasa a exponer.

Primero, es necesario analizar, el argumento de la demandante referente a la exclusión de responsabilidad, haciendo una relación directa con los actos administrativos que pretenden ser atacados, en los cuales se concluyó que, los días 01, 10 y 11 febrero de 2016 con el usuario Correc32 se alteró, introdujo y borró la información contenida en el campo de cabida y linderos de los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50S-40123279, 50S-40080741, 50S-912011 y 50S-40053611, mediante la utilización de los turnos C2016-779, C2016-1710, C2016-858 y C-20161820, respectivamente, turnos que ingresaron para solicitudes de matrículas inmobiliarias diferentes.

En igual sentido, se contó con prueba suficiente que demostró que en los folios de matrícula inmobiliaria Nos. 50S-40123279, 50S-40080741, 50S-912011 y 50S-40053611, con el usuario Correc32 se ingresó información falsa en el campo de cabida y linderos, al adicionar las expresiones “Junto con edificación existente”, “Área construida 215,00 Mts2”, “Casa construida con área de 209.00 Mts2 y “Junto con la construcción en el levantada”, circunstancia que se determina del historial traditicio de dichas matrículas, y las Escrituras Públicas allí inscritas, en las que no se encuentra acto jurídico mediante el cual se haya declarado la construcción de los inmuebles, ni el acto administrativo por el cual se ordena corregir información en un folio de matrícula.

Se adujo por la demandante que no se valoraron en debida forma las pruebas que fueron allegadas por ella al interior del procedimiento disciplinario adelantado e incluso llegó a afirmar que no existía prueba para sancionar, lo que generaría un vicio de nulidad en la actuación, sin embargo, luego de analizado el cargo formulado frente al material probatorio obrante en el expediente, se pudo determinar que en el plenario sí obra plena prueba para determinar la responsabilidad de la disciplinada frente a la alteración de los folios de matrícula objeto de estudio, en los cuales procedió a introducir información falsa, y por lo tanto, debió responder disciplinariamente.

Por lo tanto, no hubo exclusión de la valoración probatoria efectuada en primera instancia de los documentos manuscritos allegados por la propia demandante, contrario a lo que señala, dicha prueba documental fue estudiada a lo largo de toda la actuación y tenida en cuenta al momento de proferir la decisión apelada, lo cual demuestra que el operador disciplinario de primera instancia no suprimió material probatorio alguno. Diferente es, que el análisis de estos documentos, tanto en primera instancia, como en esta decisión, hayan llevado a una conclusión que la apoderada de la disciplinada no comparte, estas pruebas documentales aducidas por la demandante son los manuscritos que supuestamente efectuaba el coordinador de correcciones para impartir sus directrices.

Manifestó la demandante que, existió una exclusión de responsabilidad con fundamento en las causales de exclusión de responsabilidad que prevén los numerales 3 y 6 del artículo 28 de la Ley 734 de 2002, correspondientes a “En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales” y “Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria”, las cuales no encuentran asidero jurídico en el presente caso.

En relación con la causal de exclusión de responsabilidad que trae la Ley 734 de 2002, “En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales”, la doctrina de la Procuraduría General de la Nación ha señalado lo siguiente en el “Código Disciplinario Disciplinario Único actualizado 2008 General de la Nación

1: —(Nota Relatoria 28.6) Doctrina – Cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales. <<La existencia de esta causal de ausencia de responsabilidad, tanto en el derecho penal como en el derecho disciplinario, se encuentra fundamentada en la estructura jerárquica que compone al Estado. En este sentido, se entenderá que no existe responsabilidad disciplinaria en aquellos eventos en que el sujeto realiza una conducta dando cumplimiento a una orden emitida por el superior jerárquico, dada en el marco propio de la relación funcional y de la relación especial de sujeción, esto es, dentro de una relación propia del derecho público. Es así como la configuración de esta causal se fundamenta en la existencia de una relación tripartita, que implica al superior jerárquico que tiene la competencia para emitir una orden y que la imparte a un subordinado, quien al darle cumplimiento limita o afecta los derechos de un tercero. Los requisitos o elementos constitutivos que deben presentarse para que se configure esta causal son:

a) Existencia de una relación funcional de subordinación entre quien obedece la orden y quien la imparte, esto es, su superior jerárquico.

b) Existencia de una orden, esto es, un mandato imperativo dado por el superior al subordinado jerárquico en el que se determina la realización de un comportamiento o alguna omisión; en ese sentido, no basta con el simple deseo o ruego expresado por el superior, debe tratarse de una manifestación expresa, inequívoca y determinante de la voluntad.

c) La orden debe ser legítima, esto es, conforme a derecho, sustentada en la legalidad, debe tener un contenido lícito. Frente a este aspecto se ha discutido sobre qué sucede cuando la orden es ilegítima, caso en el cual el derecho disciplinario, al igual que en el derecho penal, el legislador ha entendido que solo la orden legítima justifica el actuar del sujeto, de suerte que si la orden es ilegítima no puede entrar a operar la causal, sin que ello excluya la posibilidad de que se invoque otra causal de ausencia de la responsabilidad como podría ser la inexigibilidad de otra conducta que excluye ya no la tipicidad sino la culpabilidad. Asimismo, la orden debe cumplir con todas las formalidades legales para su conformación, es decir, que la orden debe ser formal y materialmente legítima.

d) El superior jerárquico debe ser competente para ordenar y el inferior debe tener igualmente competencia para cumplir la orden, es así como en el marco del derecho disciplinario el servidor público que emite la orden debe contar con la facultad funcional para proferirla, esto es, no puede actuar extralimitándose en sus funciones o usurpando las asignadas a otro servidor. Por su parte, el subordinado también debe estar autorizado a dar cumplimiento a la orden por encontrarse dentro del límite propio de sus funciones e) El subordinado debe actuar con la finalidad de cumplir el mandato recibido, se trata de un requisito de índole subjetiva que se le exige al inferior, quien realiza la conducta a sabiendas y con la voluntad de dar cumplimiento a la orden y no atendiendo a otras finalidades ajenas al cumplimiento de sus funciones. (Esiquio Manuel Sánchez Herrera y A. Nataly Bermúdez Sánchez. Op. Cit. Págs. 89 y 90)”.

En efecto, como se pudo demostrar del análisis probatorio efectuado con dentro del proceso disciplinario, en ninguno de los eventos se allegó copia de los documentos a registrar, los permisos y licencias correspondientes o de las escrituras por medio de las cuales se protocolizara el acto jurídico mediante el cual se hubiese declarado las construcciones o áreas que se incluyeron en el campo de cabida y linderos, tampoco se aportó copia de los formularios de corrección, de los formatos de asignación de turnos de corrección o actos administrativos que ordenaran la corrección del folio, que acompañaran las presuntas órdenes dadas en esas hojas manuscritas.

Adujo la demandante que los actos administrativos mediante los cuales se impuso la sanción disciplinaria se expidieron con una falsa motivación debido a la ausencia de ilicitud sustancial, al respecto se puede sustraer del fallo de segunda instancia la Resolución No. 000818 del 02 de febrero de 2021: Se debe comenzar por aclarar que, en materia disciplinaria, al estudiar la comisión de la falta es necesario partir de la infracción del deber funcional, sin considerar el daño ocasionado, bastando entonces para la materialización de la falta disciplinaria la desatención de los deberes que le son exigibles sin justificación alguna. En efecto, el derecho disciplinario es un derecho de acto, es decir, que lo que se sopesa para determinar la responsabilidad en esta especie del derecho sancionador del estado es el desvalor de acción, sin tener en cuenta el resultado, a diferencia del derecho penal que para establecer la responsabilidad es necesario establecer la doble condición, desvalor de acción y desvalor de resultado, es decir, si además de la comisión de una acción antijurídica con ella se produjo un resultado dañoso. Bajo esa premisa, en materia disciplinaria basta que el disciplinado haya cometido la conducta que se presume irregular con desconocimiento o quebrantamiento de la normativa jurídica que guiaba su actuar bajo la óptica de la corrección debida en el desempeño de sus deberes oficiales, que dicha vulneración afecte de manera sustancial la función pública para que se pueda considerar como ilícita sustancialmente y que se haya cometido con dolo o con culpa, sin contemplar en ese análisis el resultado material de ese actuar.

En el presente caso el fallador de primera instancia, y también lo corroboró el de segunda instancia al analizar el recurso de alza se estableció que, con la conducta

Pag. No. 5

desplegada quedó demostrada la afectación de los deberes funcionales contemplados en el manual de funciones, como lo fueron:

- *Calificar los documentos sujetos a registro y efectuar los trámites de devolución de documentos con el fin de controlar la calidad del servicio público registral.*
- *Verificar la liquidación de los derechos e impuestos de registro, para dar cumplimiento a las tarifas establecidas por ley.*
- *Inscribir los documentos de los actos sujetos a registro, así como absolver las consultas que le sean asignados.*
- *Atender al usuario en asuntos relacionados con trámites jurídicos, que se presenten en los servicios registrales para garantizar la calidad del servicio registral. (...)*”.

Contrario a lo señalado por la demandante, el operador disciplinario analizó íntegramente la antijuridicidad sustancial de la conducta endilgada, al determinar de forma inequívoca que el comportamiento asumido por la señora María del Carmen Villamarín Idrobo afectó la correcta prestación del servicio registral al alterar la información contenida en cada uno de sus folios de matrículas estudiados en el presente proceso, toda vez, que introdujo en ellos información falsa y sin el soporte legal para ello. Comportamiento con el que, además menoscabó los principios de ética, transparencia y moralidad, faltando a su deber de garantizar a la idoneidad en el registro de instrumentos públicos como se lo encomendó el manual de funciones establecido para su cargo, sin justificación alguna.

Adicional a lo expuesto, es necesario señalar que la señora María del Carmen Villamarín Idrobo, como funcionaria pública debió sujetar su actuación a la Constitución Nacional, las leyes, directrices y los reglamentos que regulaban su actividad, y observar en todo momento un comportamiento tal que, examinada su conducta, ésta no pudiera ser objeto de reproche, ni que afectara el buen desarrollo de la administración pública, sin embargo, como se demostró a lo largo del proceso disciplinario, consignó información falsa en los folios de matrícula inmobiliaria con Nos. 50S-40123279, 50S-40080741, 50S-912011 y 50S-40053611.

Así, se infirió que la señora Villamarín Idrobo, en su calidad de profesional universitario 2044- 05 de la ORIP Bogotá – Zona sur, estaba obligada a verificar los documentos soportes que acompañaban cada una de las modificaciones que se hicieron en el sistema de registro, así como la información y documentos que ya se encontraba inscritos en los folios, y abstenerse de introducir información falsa en las respectivas matrículas inmobiliarias.

Como se manifestó por parte del operador disciplinario a largo del proceso, la protección del derecho disciplinario es el deber, pero en términos funcionales, la afectación del deber sin justificación alguna es lo que se define como ilicitud sustancial, que es el quebrantamiento del deber. Esto es, que la persona no ha obrado conforme a la función social que le compete como servidor público, y, en el caso en estudio, el

actuar de la disciplinada no representa las aptitudes que deben revestir el ejercicio de la función pública, con lo que se ratifica que incumplió los fines del Estado.

En consecuencia, la conducta cuestionada además de ser típica, resultó ilícita sustancialmente.

Finalmente, adujo la demandante que se había pasado por encima del principio de proporcionalidad establecido en el artículo 18 de la Ley 734 de 2002 y que no se dio una correcta aplicación a los criterios de graduación de la sanción establecidos en el artículo 47 de la misma norma.

Al respecto encontramos que tasación de la imposición se efectuó acudiendo a lo previsto en el artículo 47 del CDÚ, que contiene los criterios de graduación de la sanción, en específico el estipulado en el literal a) del numeral 1º, que para el caso en estudio resultó de plena aplicabilidad:

“Artículo 47. Criterios para la graduación de la sanción.

1. La cuantía de la multa y el término de duración de la suspensión e inhabilidad se fijarán de acuerdo con los siguientes criterios:

- a) Haber sido sancionado fiscal o disciplinariamente dentro de los cinco años anteriores a la comisión de la conducta que se investiga;*
- b) La diligencia y eficiencia demostrada en el desempeño del cargo o de la función;*
- c) Atribuir la responsabilidad infundadamente a un tercero;*
- d) La confesión de la falta antes de la formulación de cargos;*
- e) Haber procurado, por iniciativa propia, resarcir el daño o compensar el perjuicio causado; f) Haber devuelto, restituido o reparado, según el caso, el bien afectado con la conducta constitutiva de la falta, siempre que la devolución, restitución o reparación no se hubieren decretado en otro proceso;*
- g) El grave daño social de la conducta;*
- h) La afectación a derechos fundamentales;*
- i) El conocimiento de la ilicitud;*
- j) Pertenecer el servidor público al nivel directivo o ejecutivo de la entidad. (...)*

Al tenor de esta normatividad, la DESTITUCIÓN E INHABILIDAD GENERAL, que de acuerdo con el artículo 46 va de DIEZ A VEINTE AÑOS y, en el presente caso, al considerar en favor de la disciplinada que no se registra haya sido sancionada fiscal o disciplinariamente en los últimos cinco (5) años, y por no encontrarse probado ningún agravante, para el fallador fue procedente confirmar la sanción impuesta en primera instancia, correspondiente al extremo mínimo de la sanción.

En tales condiciones, se confirmó el fallo apelado por estar probado en el grado de certeza, tanto la comisión de la falta reprochada, como la responsabilidad de la señora María del Carmen Villamarín Idrobo, reiterando que las conclusiones se encuentran soportadas en las pruebas debidamente decretadas y practicadas, en un proceso que

Pag. No. 7

se adelantó con apego a las garantías constitucionales, al debido proceso y al derecho de defensa.

Respecto del medio de control y su caducidad

Se invoca el medio de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

—ARTÍCULO 138. NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO. *Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”*

En lo que atañe a la caducidad, habrá de decirse que la Resolución No. 01222 del 15 de febrero de 2021 mediante al cual se hizo efectiva la sanción a la demandante fue comunicada el mismo día de su expedición y la solicitud de conciliación extrajudicial fue solicitada el día 28 de mayo de 2021 a la Procuraduría de la ciudad de Bogotá, por lo tanto, no han transcurrido los cuatro meses de que habla el artículo 164 letra d) entonces, no se ha configurado la caducidad de la acción.

Teniendo en cuenta que las conductas desplegadas por la demandante, se encuadran en la falta disciplinaria grave del artículo 48 numeral 43 de la ley 734 de 2002 *concordancia con el artículo 286 ley 599 del 2000 código penal* por incumplimiento de sus deberes.

“CARGO UNICO: *La funcionaria MARIA DEL CARMEN VILLAMARIN IDROBO, con el usuario asignado a ella CORREC32 procede con turnos de corrección a alterar, introducir, y borrar información del sistema folio de la Superintendencia de Notariado y Registro en los folios de matrícula inmobiliaria de la oficina de registro Bogotá sur así:*

FECHA	MATRICULA INMOBILIARIA AFECTADA	TURNOS DE CORRECCION UTILIZADO	CAMBIO INGRESADO A LINDEROS
10 de febrero del 2016	50S-40123279	C-2016-779	“JUNTO CON EDIFICACION EXISTENTE”
10 de febrero	50S-40080741	C2016-1710	“ÁREA CONSTRUIDA 215,10

del 2016			MTS2”
1 de febrero del 2016	50S-912011	C2016-858	CASA CONSTRUIDA CON AREA DE 209.00MTS2
11 de febrero del 2016	50S-40053611	C2016-1820	“JUNTO CON LA CONSTRUCCIÓN EN EL LEVANTADA”

María Del Carmen Villamarín Idrobo, procede a borrar y cambiar la información de los linderos que allí existe e ingresa información que no corresponde, estos cambios lo realiza sin tener el lleno de requisitos y cuando en el historial crediticio de los folios en mención no se encuentra inscrito el acto jurídico mediante el cual se halla declarada la construcción de los inmuebles, conducta consagrada taxativamente como una falta gravísima contemplada en el artículo 48 numeral 43 de la ley 734, al alterar borrando la información del sistema folio de la SNR e ingresándole información que no corresponde y que está contenida en el mencionado sistema de información folio y la falta contemplada en el artículo 48 Numeral 1 de la ley 734 en concordancia con el artículo 286 ley 599 del 2000 código penal, delito de falsedad ideológica en documento público. Toda vez que la funcionaria consigno una falsedad en los folios de matrícula inmobiliaria.”

Como consecuencia, fue destituida del cargo e inhabilitada para ejercer cargos públicos por un periodo de 10 años.

- 2. Se evidencia que, en el proceso disciplinario adelantado en contra de la demandante, se respetaron las garantías propias del debido proceso y el derecho a la defensa.
- 3. La presunción de legalidad de los actos administrativos cuestionados no es posible desvirtuarla con los argumentos expuestos en la solicitud de conciliación extrajudicial en estudio, por tanto, se mantiene incólume.

La conformidad del acto administrativo con el ordenamiento jurídico se materializa en la denominada presunción de legalidad, positivizada novedosamente en el artículo 88 de la Ley 1437 de 2011. De ahí que, no obstante, el acto administrativo se presuma ajustado al ordenamiento jurídico, dicha presunción será controvertida ante el juez contencioso administrativo quien, a través de la sentencia, podrá declarar o no la nulidad del acto, y en consecuencia, desvirtuar dicha presunción demostrando la existencia de vicios en los elementos de validez del acto (falta de competencia, expedición irregular, falsa motivación, desviación de poder).

Los actos administrativos se encuentran amparados por la presunción de legalidad, derivada del sometimiento coercitivo de la actividad administrativa al ordenamiento jurídico, propio de los Estados Sociales de Derecho; por lo mismo, el legislador sujetó su control judicial a una carga procesal de alegación por parte de quien pretenda

desvirtuar la presunción. Sin embargo, ha sostenido el Honorable Consejo de Estado, sobre el alcance del control de legalidad de los actos administrativos de naturaleza disciplinaria, que debe partirse de la premisa según la cual el control de legalidad del juez administrativo sobre estos actos es pleno, es decir, no tiene restricciones ni limitaciones de ninguna índole por la naturaleza del acto administrativo que se enjuicia, como en general no las tiene sobre ningún acto administrativo.

De tal forma, que no le es posible a la señora Villamarín aspirar a que prospere su demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho.

De conformidad con los hechos narrados por la demandante las pruebas que fueron aportadas, y los argumentos expuestos en el análisis del presente caso, se interpondrán los siguientes medios exceptivos:

EXCEPCIONES DE MERITO

1. LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

Es evidente que el fallo proferido por primera instancia el día 6 de marzo de 2020 por la cual se declaró probado el cargo contra la señora Villamarín y se le impuso sanción disciplinaria e inhabilidad por diez (10), así como la Resolución 818 de 2 de febrero de 2021 que confirmó el fallo previamente señalado y la Resolución 1222 de 15 de febrero de 2021 que hizo efectiva la sanción impuesta fueron plenamente motivados los hechos y las normas vulneradas y mencionadas en las mismas. De igual forma se respetó el derecho al debido proceso pues hay congruencia entre el cargo formulado y la conducta por la que fue sancionada, se garantizó también el derecho a la contradicción y defensa puesto que se realizaron las notificaciones de las diferentes actuaciones disciplinarias necesarias para que la investigada acudiera a las audiencias, presentara pruebas y recursos.

Como se señaló en el análisis jurídico del cargo se plasmó claramente que *“con la conducta desplegada María del Carmen Villamarín Idrobo incurrió en la comisión de falta Gravísima consagrada en el artículo 48 numeral 43 de la Ley 734 del 2002, la cual hace referencia a una falta gravísima en la que pueden incurrir los servidores públicos, consistente en causar daño a los equipos estatales de informática, ALTERAR, falsificar, INTRODUCIR, borrar, ocultar o desaparecer información en cualquiera de los sistemas de información oficial, contenida en ellos o que se almacene o guarde la misma”* y por ello *“incurrió en falta contemplada en el artículo 48 Numeral 1 de la ley 734 en concordancia con el artículo 286 ley 599 del 2000 código penal, correspondiente al delito de falsedad ideológica en documentos público”*.

Debido a esto último fue que procedió instaurar denuncia penal en contra de la señora María del Carmen Villamarín ante la Fiscalía General de la Nación el 17 de febrero de 2017.

En cuanto a la sanción, esta fue decidida de acuerdo la conducta típica y antijurídica, impuesta con proporcionalidad y razonabilidad, como se indicó en los actos administrativos demandados, puesto que es indiscutible la ilicitud sustancial de que trata el artículo 5 de la Ley 734 de 2002 el cual preceptúa que *“La falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna”*.

El artículo 6 de la Carta Política prevé la cláusula general de responsabilidad de los ciudadanos y, la específica y excluyente de los servidores públicos, los cuales deben responder ante las autoridades por infringir la Constitución, la ley, así como por la omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones, norma que en consonancia con el artículo 122 ibídem, armoniza su contenido al determinar que no existirá cargo o empleo público que no tenga funciones detalladas en la ley o reglamento y todo servidor público, deberá ejercer su cargo jurando cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben, y teniendo en cuenta que la ahora demandante realizó modificaciones en algunos folios de matrícula a pesar que no tenía soporte legal para ello, se encuentra plenamente ajustado a derecho no solo la sanción de retiro de su cargo sino la inhabilidad por diez años que le fuera impuesta, puesto que la conducta no corresponde a alguna causal de exclusión de responsabilidad de las descritas en la ley disciplinaria.

2. COBRO DE LO NO DEBIDO E INEXISTENCIA DE LA OBLIGACION

A partir de la pretensión de pago retroactivo e indexado de los salarios, prestaciones sociales, cotizaciones de seguridad social en salud y pensión, y demás emolumentos dejados de percibir por la demandante desde el 15 de febrero de 2021, es preciso resaltar el hecho de que no hay lugar a ello ni tiene derecho a su reconocimiento con base en el retiro justificado del cargo que ocupaba, ya que como lo señaló el acto administrativo que profirió la Superintendencia Notariado y Registro en primera instancia y que fuera confirmado en la Resolución 818 de 2 de febrero de 2021 *“la señora María del Carmen Villamarín Idrobo, afectó de manera sustancial sus deberes funcionales como servidor público, al INTRODUCIR información irregular en los F.M.150S- 40123279, 50S-40080741, 50S-40053611 y 50S-91201, ALTERANDO el campo de descripción cabida y linderos realizando correcciones sin el lleno de requisitos, utilizando turnos de corrección que no corresponde, trasgrediendo lo establecido en su manual de funciones, La Ley 1579 de 2012, la Constitución Política de Colombia, lo cual se encuentra directamente vinculada con los principios de transparencia y moralidad que rigen la función administrativa”*.

Por lo tanto, al ser servidor público y haber vulnerado la norma que regulaba sus deberes y funciones resulta inviable que legalmente se le reintegre a su cargo y se le paguen los salarios y prestaciones a una persona que decidió alterar documentos públicos bajo el conocimiento absoluto que lo hacía infringiendo la Constitución y la ley.

Por lo anteriormente expuesto, ruego su señoría declarar probada las presentes excepciones y condenar en costas a la parte demandante.

- **LA GENERICA / DEMAS QUE SE PRUEBEN DENTRO DEL TRAMITE PROCESAL**

5. PRUEBAS

Comedidamente solicito tener como tales las aportadas por la demandante en cuanto tengan valor probatorio; las que de oficio se sirva requerir a las instancias correspondientes.

Se anexará el fallo de primera instancia fechado el 6 de marzo de 2020, la Resolución 818 de 2 de febrero de 2021, la Resolución 1222 de 15 de febrero de 20221, constancia de vinculación laboral expedida por la Dirección de Talento Humano, Manual de Funciones y Competencias y la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación.

6. ANEXOS

Las pruebas señaladas, el poder y soportes correspondientes.

7. PROCESO Y COMPETENCIA

Su Señoría es competente, en virtud de lo establecido en el artículo 155 y siguientes del CPACA.

8. NOTIFICACIONES

Las recibiré en los correos electrónicos notificaciones.juridica@supernotariado.gov.co, catalina.cancino@supernotariado.gov.co y catacanp@hotmail.com. Mi celular es 314 374 84 30.

Atentamente,



CATALINA EUGENIA CANCINO PINZON
C.C. No. 52.053.853
T.P 109.545 del C.S.J

Doctor

HUMBERTO LOPEZ NARVAEZ

JUEZ CEINTISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.

SECCIÓN SEGUNDA

correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C.

Referencia: Proceso 11001-33-35-027-2021-00245-00

Actor: **María del Carmen Villamil Idrobo**

Demandado: Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho- Superintendencia de Notariado y Registro.

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Asunto: Contestación Demanda.

MARLENY ÁLVAREZ ÁLVAREZ, identificada con cédula de ciudadanía No. 51.781.886 de Bogotá D.C., y Tarjeta Profesional No. 132973 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando como apoderada del Ministerio de Justicia y del Derecho, según poder otorgado por el Director Jurídico de ésta entidad, me permito dar contestación al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho dentro del presente asunto, en los siguientes términos:

I. HECHOS

No me consta ninguno de los hechos planteados por el demandante y, por lo tanto, me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

II. PRETENSIONES

Manifiesto al Despacho que de conformidad con las razones de la defensa que propondré a continuación, el Ministerio de Justicia y del Derecho se **OPONE** a todas y cada una de las pretensiones del demandante, toda vez que la entidad que represento carece de legitimación procesal y material en la causa por pasiva y/o la indebida representación de la nación, puesto que no participó, directa ni indirectamente, en los hechos que dan lugar a la presente demanda, ni ejerce la representación legal de la entidad directamente involucrada, esto es la Superintendencia de Notariado y Registro, la cual por disposición legal, cuenta con autonomía administrativa, financiera, presupuestal y representación legal propia.

III. RAZONES DE LA DEFENSA

De conformidad con el artículo 159 del actual Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), propongo las siguientes excepciones:

A- Falta de legitimación procesal en la causa por pasiva, en virtud a que el artículo 159 del C.P.A.C.A., establece:

"Artículo 159. Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados.

Bogotá D.C., Colombia

Calle 53 No. 13 - 27 • Teléfono (57) (1) 444 3100 • www.minjusticia.gov.co

La entidad, órgano u organismo estatal estará representada para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo...o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor Jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho...

El presidente del Senado representa a la Nación en cuanto se relacione con la Rama Legislativa; y el Director Ejecutivo de Administración Judicial la representa en cuanto se relacione con la Rama Judicial, salvo si se trata de procesos en los que deba ser parte la Fiscalía General de la Nación... ” (Subrayado fuera de texto).

Lo anterior, y atendiendo que los hechos y pretensiones de la demanda están relacionados con asuntos concernientes a las funciones y competencias de la Superintendencia de Notariado y Registro, ante lo cual, acorde con las normas enunciadas a continuación, es el Superintendente de Notariado y Registro, el llamado para ejercer la representación y defensa judicial de los intereses de la entidad que tiene a cargo.

En este orden, es oportuno destacar lo siguiente:

1. De acuerdo con el artículo 1° del Decreto 2723 DE 2014, la Superintendencia de Notariado y Registro es una entidad pública con personería Jurídica propia, autonomía administrativa y presupuestal y su representante legal es el señor Superintendente.

El artículo 2° ibídem, señala *Adscripción*. La Superintendencia de Notariado y Registro está adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho.

Por su parte, el artículo 7°. Ibídem, señala que la Dirección y Administración de la Superintendencia de Notariado y Registro estará a cargo de un Consejo Directivo y del Superintendente de Notariado y Registro, quien para todos los efectos será su representante legal.

El artículo 13°, indica que son funciones del Despacho del Superintendente, las siguientes:

“(…).

4. Ejercer la representación legal de la Entidad.

(…).

18. Fallar en segunda instancia los procesos disciplinarios que se adelanten contra los notarios y ex notarios, registradores y ex registradores de instrumentos públicos, servidores y ex servidores de la Superintendencia.

(…).

“23. Nombrar, remover y distribuir a los servidores de la Superintendencia, de conformidad con las disposiciones vigentes.

2. De acuerdo con la normatividad citada, el Ministerio de Justicia y del Derecho debe ser absuelto o desvinculado de la presente acción en tanto los hechos objeto de demanda tienen como sustento la presunta irregularidad en la expedición de los actos administrativos Resoluciones del Fallo de Primera Instancia proferido el 6 de marzo de 2020, por medio del cual el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Superintendencia de Notariado y Registro, impuso sanción disciplinaria a la demandante consistente en destitución del cargo e inhabilidad general por el

termino de diez años; de la Resolución N.º 00818 de 2 de febrero de 2021, a través de la cual la Superintendencia de Notariado y Registro, resolvió el Recurso de Apelación interpuesto contra el fallo antes relacionado y confirmó la sanción impuesta, y de la Resolución N.º 01222 de 15 de febrero de 2021, por medio de la cual se hizo efectiva la sanción disciplinaria.

3.- En otras palabras, conforme a los hechos expuestos por el mismo demandante, es forzoso evidenciar que tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a actos administrativos de carácter particular y concreto donde no hay intervención o actuación alguna del Ministerio de Justicia y del Derecho, de acuerdo con sus funciones y competencias establecidas en el Decreto 1427 de 2017, se puede concluir, que en este asunto la defensa judicial es materia y competencia privativa o exclusiva de la Superintendencia de Notariado y Registro, por conducto del señor Superintendente, en especial para defender las actuaciones proferidas de forma autónomas por este organismo dentro de su autonomía e independiente, razón por la cual el Ministerio de Justicia y del Derecho NO ha ni puede haber vulnerado ningún derecho a la parte Demandante y más aún reitero no es la autoridad encargada de nominar, nombrar, destituir, sancionar, etc., a los funcionarios que hacen parte de la Superintendencia de Notariado y Registro, ni tiene a su cargo la representación judicial de los asuntos concernientes a ésta entidad.

B. Falta de legitimación material en la causa por pasiva:

1. El Ministerio de Justicia y del Derecho no puede ser condenado en este asunto porque no existe relación real entre la entidad y las pretensiones que en su contra formula el demandante, configurándose así la denominada **FALTA DE LEGITIMACIÓN MATERIAL EN LA CAUSA POR PASIVA** como condición anterior necesaria que permitiría dictar sentencia de mérito desfavorable a los intereses de la entidad por mí representada. Se fundamenta la indebida representación por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho dentro del presente proceso, teniendo en cuenta los siguientes planteamientos:

2. El artículo 113 de la Constitución Política señala que son ramas del poder público, la legislativa, la ejecutiva y la judicial y que *“Además de los órganos que las integran existen **otros, autónomos e independientes**, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines”*. (Negrilla fuera de texto).

- El artículo 123 ibídem, inciso 2º, dispone: *“Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento”*.

- El artículo 162 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), establece los requisitos que toda demanda debe reunir ante la jurisdicción contencioso administrativa y en su numeral 1o. establece: *“La designación de las partes y sus representantes”*.

- El Consejo de Estado señaló: *“...Resulta requisito indispensable y necesario para que pueda entrabarse la relación procesal que en la demanda se precise además de la parte demandante, la parte demandada y su representante, y en el auto admisorio se ordene su notificación y no es suficiente, a la luz de las normas citadas la precisión del acto o actos demandados y de las autoridades que las expidieron, pues es necesario identificar debidamente la parte demandada, la cual debe tener capacidad para ser sujeto procesal y ser su representante...”*¹

¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de abril de 1989.

- La mencionada Corporación, también ha manifestado “... Los actores demandaron a la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad de derecho público, con personería jurídica otorgada por el Decreto 1659 de 1978 y calificada como establecimiento público, según sentencia del 14 de febrero de 1995 de la Corte Suprema de Justicia, vale decir, que es un centro de imputación y relaciones jurídicas y cuya función fundamental es ejercer inspección y vigilancia (art. 3º. del Decreto 1659 de 1978) sobre el servicio público de Notariado a cargo de la Nación...”.²

- La misma Honorable Corporación, expuso: “Se exonera de responsabilidad a la Nación - Ministerio de Justicia, teniendo en cuenta que la condena afecta a la Superintendencia de Notariado y Registro que es un ente administrativo autónomo, con personería jurídica propia.

Es claro que este ente administrativo es el llamado a responder pues es el superior jerárquico de las oficinas de registro donde se encuentran vinculados los funcionarios y empleados con cuyas conductas comprometieron la responsabilidad de la entidad superior, tal como se desprende de la organización de las oficinas de registro contemplada en los artículos 62 y ss, del Decreto 1250 de 1970.

Sobre el particular es pertinente destacar que la Superintendencia de Notariado y Registro es un organismo administrativo, con personería jurídica propia, adscrita al Ministerio de Justicia y del Derecho, con organización administrativa propia que de suyo compromete independientemente su responsabilidad. El Ministerio sobre dicha Superintendencia apenas ejerce un control de tutela, sin que por ello deba extenderse a la Nación la responsabilidad patrimonial y administrativa que a ella compete”.³

En consecuencia, de acuerdo a las funciones otorgadas en el Decreto 2897 de 2011, modificado por el Decreto 427 de 2017 “Por el cual se estructura el Ministerio de Justicia y del Derecho y se dictan otras disposiciones”, es claro que en el caso en concreto no este Ministerio el llamado a responder, eventualmente, por la violación de los derechos fundamentales que reclama la actora, por lo cual en sana lógica jurídica impone la exclusión del Ministerio de Justicia y del Derecho de las pretensiones del actor.

IV. PETICIÓN

De lo aquí expuesto, resulta en forma diáfana, que el Ministerio de Justicia y del Derecho, no está legitimado ni tiene la representación de la Superintendencia de Notariado y Registro, por cuanto como ya se ha mencionado, el mismo ostenta el carácter de Organismo autónomo, cuya representación legal se encuentra establecida en cabeza del Superintendente de Notariado y Registro, en virtud del Decreto 2723 DE 2014, por consiguiente, ostenta su representación judicial para todos los efectos legales, y en particular para defender la legalidad de los actos administrativos demandados, los cuales constituyen la materialización de los criterios aplicados por parte de los organismos competentes para ejercer la función disciplinaria y sancionatoria de la entidad, razón por la cual peticiono la exclusión de mí representada de la presente actuación.

V. PRUEBAS.

² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Expediente número 6.693, Consejero Ponente doctor Juan de Dios Montes Hernández, en sentencia del 11 de junio de 1994.

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, en sentencia del 6 de agosto de 1998, Expediente número 11.181, Consejero Ponente Doctor Jesús María Carrillo Ballesteros.

Demando tener como tales las aportadas por la parte demandante con el escrito de demanda, las que de oficio tenga a consideración el señor Juez decretar y practicar

VI. NOTIFICACIÓN

La suscrita apoderada junto con mi representada recibiremos notificaciones y comunicaciones en la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia y del Derecho, ubicada en la Calle 53 No.13 - 27, Piso 5° de Bogotá D. C. P.B. X. No. 4443100, correos electrónicos: notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co y marleny.alvarez@minjusticia.gov.co

La demandante y su apoderada en las direcciones indicada en el escrito de demanda.

VII. RECONOCIMIENTO DE PERSONERÍA

Con el debido respeto solicito el reconocimiento de personería para actuar en nombre y representación del Ministerio de Justicia y del Derecho, para lo cual aporte los siguientes:

VIII. ANEXOS

A la presente actuación se adjuntan los siguientes documentos:

1. Poder para actuar debidamente otorgado a la suscrita por el Director Jurídico
2. Copia de la Resolución de nombramiento del Director Jurídico
3. Copia del acta de posesión del Director Jurídico
4. Copia de la Resolución mediante la cual se delega la representación judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho en el Director Jurídico.

Del Honorable Juez,



Marleny Álvarez Álvarez

C.C. 51.781.886 de Bogotá D.C.

T.P. 132.973 C.S.J.

Elaboró: Marleny Álvarez Álvarez
EXT21-0048663/22-10-2021
TRD: 1501/36/145
Anexos: Lo anunciado